

La opción de querrellarse contra Qué Pasa la tomó el mismo jueves cuando leyó la publicación:

Cómo se gestó la decisión más personal de la Presidenta Bachelet

MARIELA HERRERA y CARLOS SALDIVIA

La primera alerta en La Moneda la dio la jefa de prensa de la Presidencia, Haydée Rojas. La periodista leyó en internet la versión web de la revista Qué Pasa que incluía transcripciones de conversaciones —interceptadas por el OS-9 de Carabineros— del gestor inmobiliario de Caval, Juan Díaz. En ellas, el ex operador político de la UDI se refería a la Presidenta Michelle Bachelet y su posible vinculación en el caso Caval; además, nombraba a otras personalidades públicas en sus conversaciones, como Pablo Longueira y Herman Chadwick, entre otros.

De inmediato, Rojas imprimió el reportaje y se dirigió con premura a la oficina de la Presidenta.

La Mandataria, mientras comenzaba a leer el texto, llamó a su jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte. Las tres analizaron la publicación. Pero no hubo tiempo para interpretaciones, pues la molestia de la Jefa de Estado fue tal, que dijo que era urgente tomar medidas para que la revista se retractara. En ese momento la jefa de prensa le comunicó a Bachelet que Qué Pasa ya había sacado otra versión online en la que señalaban que habían editado la nota eliminando "fragmentos donde se hacían acusaciones graves contra terceras personas".

Pero no era suficiente. La consigna en ese momento fue que había que tomar medidas concretas para frenar el daño a la imagen presidencial que se estaba cometiendo.

En esa misma reunión recordaron la publicación de otro medio online, en agosto de 2015, que hablaba extensamente sobre el estado de salud de la Mandataria. En ese entonces no se tomaron medidas legales y fue el vocero Marcelo Díaz quien enfrentó la polémica. En aquella oportunidad, el titular de la Segregación dijo que se traspasaban los "límites de la decencia". Habló de "vileza", "bajeza" y "machismo".

El "no más" de la Presidenta

Pero en esta ocasión, el tema no quedó en manos del vocero ni ningún otro integrante del comité político, sino que la propia Jefa de Estado fue quien se hizo cargo. "¡No más!", habría sido el tono de las palabras de Bachelet frente a Rojas y Uriarte. El camino, se comentó en ese momento, era llevar adelante algún tipo de acción legal. Y para poder concretarla, la Mandataria pidió que la comunicaran con el abogado Juan Pablo Hermosilla.

Desde el año pasado, la Presidenta mantiene una relación de estrecha confianza con el penalista y se ha convertido en uno de sus principales consejeros en temas judiciales. Se comenta en la esfera política que el fue el artífice de la estrategia judicial para enfrentar cuestionamientos de la "precampana" y que habría sugerido

No habló del tema con su equipo político. Su actuar respondió a la molestia que tiene la Mandataria con la manera en que, sostiene su círculo, se ha maltratado la imagen presidencial. Buscan que esta acción sea un "llamado de atención" para futuras publicaciones.



La Presidenta Bachelet defendió desde Francia, en medio de la reunión de la OCDE, la querrela presentada contra la revista. Dijo que lo hacía para defender su honra.



Juan Pablo Hermosilla, desde el año pasado, se ha convertido en el asesor jurídico de la Presidenta.



La jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte, y su equipo están convencidos de que se actuó bien con la querrela.

al recaudador de fondos, Giorgio Martelli, que contara a fiscalía todas sus gestiones, pero que dejara fuera a la Mandataria; no así al ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo.

Con Hermosilla al teléfono, se zanjó que el camino sería entablar una querrela contra la revista. Ella actuaría como "ciudadana" y Hermosilla ofreció sus servicios *ad honorem*. Mientras el abogado le daba forma al texto legal, la Presidenta siguió con su agenda.



El jueves 26 en la noche, minutos antes de viajar a Aysén, la Mandataria se refirió a la publicación como una "canallada, una infamia". Los noticieros centrales de TV difundieron sus palabras en directo.

Pasadas las 22:00 horas de ese mismo jueves, la Mandataria ya se encontraba en el Grupo 10 de la Fuerza Aérea para viajar a la Región de Aysén. Antes de embarcarse en el avión presidencial, en un improvisado punto de prensa —con tono serio y el rostro algo crispado— dijo que desmentía la información publicada, y agregó que "creo que es una canallada, una infamia". A renglón seguido señaló que estudiaban acciones legales, "porque basta ya de mentiras".

División en el segundo piso

Finalmente, el lunes 30 la Mandataria emprendió viaje a Francia y en Santiago el contacto con Hermosilla mantuvo Uriarte. Así, el martes, mientras Bachelet arribaba al aeropuerto de Orly en París, el penalista afinaba los detalles de la querrela para ingresarla ese día en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago.

Al día siguiente, tras la inauguración de la reunión ministerial de la OCDE, la Presidenta abordó el tema con la prensa que viajó con ella a París.

Sin aceptar preguntas, dijo que había ejercido su derecho a defenderse de "mentiras e injurias que afectan lo más preciado que tiene una persona: su honra". Y habló sobre la necesidad de un "periodismo serio y riguroso".

La decisión de la Mandataria seguía siendo personal y no consultada con sus ministros políticos.

De hecho, el comité político estuvo ajeno a su línea de acción y el tema ni siquiera fue abordado en la reunión de los lunes. La decisión se fraguó en el círculo presidencial más íntimo. Incluso, el jefe de contenidos, Pedro Güell, no participó. Además, hubo divisiones entre los funcionarios de rango intermedio del segundo piso. Una minoría consideraba adecuada la vía judicial, mientras que periodistas y abogados con más experiencia política advertían que era inadecuado, pues generaría críticas desde el oficialismo y nada aseguraba un triunfo judicial.

Hasta antes de la querrela, la Mandataria había recibido demostraciones de apoyo de diversos sectores políticos. La Moneda veía de buena manera cómo se generaba un respaldo transversal. Pero la decisión final de darle curso a la acción jurídica cambió el es-

cenario de manera radical.

La defensa de la libertad de prensa y el recordar que ningún Presidente, luego del regreso de la democracia, había emprendido este tipo de acciones contra periodistas, ya no hacían tan fácil empatizar con la Mandataria.

A las críticas de congresistas de la Nueva Mayoría se sumaron organizaciones de periodistas, entidades de DD.HH. e incluso instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo relator sobre libertad de expresión, Edison Lanza, se encuentra en Chile por estos días.

La distancia de Interior

A nivel de ministros, el vocero Díaz y el titular de la Segregación, Nicolás Ezaguirre, están en la postura más cercana a la Presidenta, mientras que en Interior, ni el ministro Burgos ni el subsecretario Aleuy comparten 100% el actuar de la Mandataria. El militante socialista el viernes no descartó que una opción pudo haber sido acudir a un tribunal de ética de los medios. Y reiteró que fue "una decisión personal de la Presidenta con su abogado".

En tanto, Burgos mantuvo un estricto silencio. Solo habló el viernes 27 de mayo para informar a la prensa que la Mandataria había declarado como testigo el martes 24 ante el fiscal del caso Caval, Sergio Moya. Esto lo hizo, dijo el jefe de gabinete, para separar ese hecho con la publicación del semanario. Pero en su declaración no hizo alusión a la revista ni a acciones judiciales. "Este fulano de apellido Díaz (...) dijo una serie de canalladas respecto a la Presidenta", apuntó Burgos y en los días siguientes optó por no referirse al tema.

Distinta es la sensación en el bacheletismo. En el círculo de Ana Lya Uriarte están convencidos de que hicieron lo correcto, que las críticas pasarán y que se marcará un precedente para que los medios sean más cuidadosos a la hora de informar algo que pueda afectar la imagen presidencial.

Quienes esperan buscar una salida a este momento, en que la Presidenta es blanco de críticas, no descartaban que este fin de semana se reuniera el comité político en casa de la Mandataria. Pero eran pocas las señales para pensar que Bachelet retrocedería. El viernes, su abogado dijo que "veredicto" llegar a algún tipo de acuerdo con la revista.

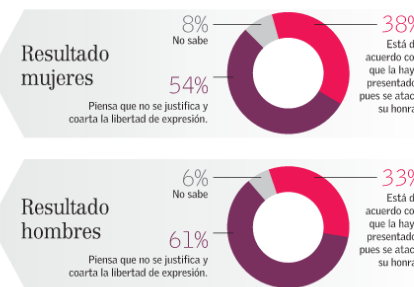
A quien también estaría escuchando por estos días la Presidenta es a Carlos Mackenney. Según explican en La Moneda, Bachelet se habría contactado con el abogado, ex integrante del Consejo de Defensa del Estado, para conocer su visión por su experiencia y la amistad que los une.

Esta semana no comenzará tranquila para la Mandataria, pues el tema amenaza con seguir en la agenda. Desde mañana y hasta el 10 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizará su 158º período extraordinario de sesiones en Santiago. Y uno de sus temas en tabla puede acarrear más de una polémica: Derecho a la libertad de expresión y normas penales sobre difamación en América del Sur. ■

Encuesta Panel Ciudadano-UDD:

58% cree que se coarta libertad de expresión

La querrela que presentó la Presidenta



Ficha técnica

El universo de la encuesta corresponde a los mayores de 18 años residentes en el Gran Santiago. Para ello se elaboró una muestra de 1.200 panelistas, seleccionados aleatoriamente en cada una de las etapas. Estos fueron inscritos mediante un trabajo de campo que se desarrolló durante 5 meses, en los cuales cada miembro del panel fue entrevistado en terreno para el análisis de segmentación base (edad, sexo, nivel educacional, etc.). La encuesta que publica hoy Reportajes fue enviada a sus teléfonos el jueves a las 21:00 horas y finalizada el viernes a las 17:00. Un total de 731 miembros del panel contestaron indicando saber de la querrela interpuesta por la Presidenta. A ellos fue a quienes se consultó luego su opinión respecto de la acción judicial. Así, el margen de error del estudio es de 3,6%, para un nivel de confianza del 95%.